
Howard Newby

*Urbanización y estructura
de clases rurales:
reflexiones en torno
al estudio de un caso **

Desde 1970 me he dedicado a la investigación del cambio social en la Inglaterra rural, primeramente en virtud a un estudio sobre los obreros agrícolas (Newby, 1977), y después mediante una investigación sobre la cambiante situación de los agricultores y los propietarios (Newby y col., 1978). En este ensayo deseo reflexionar sobre algunos de los resultados de estos trabajos, lo cual me permitirá hilvanar una serie de temas que hasta ahora había considerado por separado, centrando el foco temático del ensayo en el impacto que sobre la estructura de la sociedad rural acarrea el proceso de «urbanización». Por supuesto que «urbanización» no se entiende aquí como el proceso de desarrollo físico de ciudades y fábricas sobre lo que una vez fuera campo, sino como el traslado hacia el campo de una población urbana —«commuters» o viajeros abonados (1), propietarios de una segunda casa, matrimonios

(*) Una primera versión de este ensayo fue presentada al congreso del Centre for Environmental Studies (Centro de Estudios Medioambientales), sobre el tema «Conflicto y Cambio Urbano», celebrado en la Universidad de Nottingham en enero de 1979, y está basada en una investigación financiada por el S. S. R. C. (Social Science Research Council). Traducido del inglés por Luis Mendiz.

(1) «Commuter» es un vocablo norteamericano aplicable a toda persona que adquiere y usa un billete de abono para viajar al trabajo diariamente (el precio ha sido reducido o conmutado); por extensión se designa así en Inglaterra a todo el que viaja, por cualquier medio, una distancia apreciable entre dos poblaciones para ir al trabajo.

jubilados— cuyo lugar de trabajo, presente o pretérito, se halla en la ciudad o en la capital, y no en el área rural local. Su llegada al campo, particularmente desde la segunda guerra mundial, ha asegurado el que la sociedad rural inglesa ya no sea, ni siquiera mayoritariamente, una sociedad agraria. Podría argumentarse, de hecho, que el cambio social más importante ocurrido en el campo en años recientes ha estado relacionado con esta cambiante composición social y ocupacional de su población. Este cambio no ha sido ignorado por los sociólogos (véase, por ejemplo, Pahl, 1965, 1970; Crichton, 1964; Thorns, 1968; Harris, 1974; Ambrose, 1974; una excelente bibliografía aparece en Connell, 1974). Sin embargo, no se ha intentado todavía el análisis sistemático de las consecuencias de estos cambios desde el punto de vista de su trascendencia sobre la vida de la población local, predominantemente agraria.

Este ensayo representa una modesta aproximación, meditada y esquemática, a esa tarea. Son necesarias, sin embargo, antes de nada, unas palabras de aviso. Lo que aquí se relata está basado en investigaciones realizadas en una región, East Anglia, que de ninguna manera podría considerarse como representativa de la Inglaterra rural en su conjunto. Hasta qué punto sería posible derivar conclusiones generales a partir de este estudio es, por tanto, materia discutible. Podría incluso decirse que la situación en East Anglia exhibe los efectos del proceso de urbanización de la forma más *exagerada*, paradójicamente debido no solamente a que la región continúa siendo predominantemente agraria, sino también a que la agricultura es allí tan próspera y capitalista. Como veremos, esto ha podido contribuir a la privación relativa de los sectores más pobres de la población rural local —una de las consecuencias más importantes de la urbanización, como se tratará de demostrar— en un grado que no es aparente (todavía) en ningún otro sitio. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, debido a la extrema variedad del conjunto, ninguna región o zona rural inglesa puede considerarse «típica». Es más importante, por consiguiente, el localizar el área de estudio en el contexto de la sociedad rural

inglesa y de la economía agraria en su conjunto que el enzarzarse en la búsqueda de un tipo ideal que no tendría sentido.

East Anglia es una de las regiones agrícolas más prósperas del país y constituye, sin duda, «una de las principales zonas de empresas agrarias organizadas según el modelo capitalista en la Gran Bretaña» (Frankenberg, 1966, pág. 252). Allí predomina un tipo de producción agrícola —cereales— donde el factor capital es dominante y que ha estado a la vanguardia del cambio científico, tecnológico y empresarial. La agricultura en East Anglia es una actividad formal cuyo fin es el enriquecimiento y tiene muy poco que ver, bien como modo de vida, bien desde el punto de vista estético, con las escenas bucólicas que aparecen en muchos de los libros populares sobre la vida rural inglesa y a las que la población urbana es tan sensible. En general, las empresas agrarias en East Anglia son más grandes, están más mecanizadas y especializadas y emplean más mano de obra que las de Inglaterra y Gales. Incluso la producción por acre tiende a ser apreciablemente más alta en aquella región, lo cual refleja no solamente las mejores condiciones físicas y climáticas, sino también la mayor inversión en maquinaria y en otras innovaciones tecnológicas propias de las grandes empresas. Además, en común con otras áreas de Inglaterra, continúa la tendencia hacia una mayor escala de producción, una especialización y concentración crecientes, una mayor inversión y una consecuente disminución del número de empresas y de obreros agrícolas (véase, para más detalles, Newby y col., 1978, págs. 48-58). Todas estas tendencias continúan y no muestran signos de remisión en un futuro próximo: de hecho, la entrada en la C. E. E. ha acelerado algunas de ellas.

Esta base económica se refleja en la estructura social de la población agrícola de la región. El sistema de agricultura intensiva de East Anglia ha producido, a diferencia de otras áreas de la Inglaterra rural, una clara y ampliamente reconocida estructura de clases en la que predominan, de un lado, los grandes agricultores propietarios y, del otro, los trabajadores agrícolas a sueldo. Excepto en los

Fens (2), en East Anglia no existe una tradición de pequeñas propiedades campesinas cultivadas por el propietario o por un arrendatario, como en el resto de Inglaterra. En general, la relación predominante en el campo ha sido siempre la existente entre patrono y empleado. En el este de la región, por ejemplo, se ha practicado el cercamiento desde la época de los Sajones. Incluso los agricultores arrendatarios han sido siempre lo suficientemente prósperos como para requerir una gran cantidad de mano de obra asalariada, al tiempo que los propietarios no fueron nunca simples terratenientes, mucho menos absentistas, y prefirieron cultivar una parte de sus propiedades «por su propia mano». Por consiguiente, no hay una tradición histórica de conflictos entre propietarios y arrendatarios, aunque sí hay una tradición de lucha entre patronos y empleados (ver Hobsbawm y Rudé, 1973). Hoy día, a pesar de la reciente participación de las instituciones financieras de la «City» en el mercado de la propiedad rústica, el porcentaje de agricultores propietarios es superior a la media nacional (ver Newby y col., 1978, capítulo 3), y existen considerables vínculos entre agricultores propietarios, terratenientes y arrendatarios, mientras que no es fácil ni tiene sentido el ordenar estos grupos jerárquicamente: para los obreros agrícolas, el «status» de arrendatario es uno de los atributos menos significativos a la hora de evaluar a los agricultores locales y es frecuentemente desconocido, de hecho (excepto para los administradores).

Así, pues, la sociedad rural en East Anglia ha estado tradicionalmente dividida en clases: los agricultores y propietarios han formado una clase dominante fácilmente identificable que monopolizó casi totalmente las oportunidades de empleo y de vivienda, la magistratura y la vida política local, mientras que los trabajadores agrícolas y los otros miembros de la clase trabajadora rural han sido relativamente impotentes ante este control de las instituciones rurales. La distribución de la riqueza agrícola de la región ha sido, y todavía lo es hasta cierto punto, el fiel reflejo de

(2) Distritos bajos y pantanosos (de marisma) en los condados de Cambridgeshire y Lincolnshire.

ese dominio. Hay un marcado contraste entre la riqueza de los agricultores y la pobreza de los obreros agrícolas (Newby, 1972). Mientras el valor monetario (capital) de la tierra se aproxima a las 2.000 libras esterlinas por acre, son muy pocos los obreros que poseen siquiera su propia casa. Para adquirir y aprovisionar una explotación agrícola económicamente viable en la zona, un trabajador agrícola necesitaría, como mínimo, un millón de libras esterlinas. No es sorprendente así que la movilidad social entre las dos clases sea mínima. Esta rígida y jerárquica estructura de clases se está complicando con la presencia de los recién llegados procedentes de la ciudad, que, compuestos en su mayoría de profesionales y ejecutivos, representan una nueva «clase media» (así son vistos tanto por los empresarios como por los obreros agrícolas) inserta en el centro de esa estructura dual de clases, y que significan una amenaza para el continuado predominio político de las clases dominantes locales, como ya lo admiten la mayoría de los agricultores. Al mismo tiempo, su presencia ha vuelto menos coherente y definida la estructura de clases rurales y, consecuentemente, ha creado, como veremos, cierto «pánico de status» entre la población agrícola, aspecto sobre el cual nos hemos detenido particularmente los sociólogos, yo incluido. Sin embargo, si bien la división que se ha producido entre «locales» y «recién llegados» es indiscutible, hay otras consecuencias, más tangibles, que requieren similar consideración.

Es precisamente la interacción entre esos cambios objetivos y la percepción que tienen de ellos las personas afectadas lo que forma el tema central del presente trabajo, dado que la respuesta subjetiva de la población rural nos es seguramente más familiar. Así que voy a resumir brevemente mis hallazgos sobre este último aspecto del cambio en la sociedad rural contemporánea antes de pasar a considerar la naturaleza y alcance de los cambios más materiales introducidos por el proceso de urbanización del campo.

LA CAMBIANTE COMUNIDAD ALDEANA

La percepción que experimenta el cambio la población rural ha estado frecuentemente matizada por la cuestión de la «comunidad» aldeana inglesa. La afluencia de forasteros ha suscitado, casi invariablemente, el tema de hasta qué punto han sido ellos los responsables de la destrucción del «espíritu comunitario» que se supone había existido hasta entonces. Sin embargo, las consecuencias del proceso de urbanización para la comunidad necesitan analizarse con mucho cuidado. Si la aldea fuese casi por entero una comunidad agrícola, entonces podría argumentarse, como veremos, que la trabazón y el traslado de las relaciones sociales producían un sistema social local en el que todo el mundo se conocía; pero debemos guardarnos de santificar este hecho con una nostalgia desatinada. Los aldeanos formaban una «comunidad» porque no tenían otro remedio: estaban presos de varias clases de constreñimientos, incluida la pobreza, de tal forma que la ayuda recíproca era una necesidad. La «comunidad» aldeana era, por tanto, una «mutualidad de los oprimidos» (Williams, 1973, pág. 182). El que el chismorreó, los altercados y las enemistades de familias fuesen o no una faceta más importante que el espíritu de hermandad podría variar de aldea en aldea y es, en última instancia, materia de juicio subjetivo. En cualquier caso, la rapidez y severidad de la reciente dislocación de la estructura social aldeana han dado como resultado el que se haya adjudicado una *ideología* de «comunidad» a sus cualidades pasadas; y un genuino sentimiento de pérdida ha estimulado la vuelta al tema de la «edad de oro» de la vida aldeana, que puede compararse con un presente manifiestamente menos aceptable. Como esto constituye, de hecho, un comentario indirecto del presente no menos que una interpretación literal del pasado, lo que tales versiones nos dicen acerca de la calidad de la vida aldeana en el pasado debe tomarse con una considerable dosis de escepticismo. Más todavía, ya que la evaluación del «espíritu» de comunidad depende de preferencias y valores altamente variables y subjetivos, es vir-

tualmente imposible generalizar acerca de si ha habido o no una «decadencia de la comunidad» en la aldea inglesa.

Los cambios acaecidos en la estructura social de la aldea se avienen, sin embargo, a la generalización, y han sido tipificados en otro trabajo (Newby, 1977, capítulo 6) como sigue:

1. La comunidad de trabajo

La población de la mayoría de las aldeas vivía de la agricultura con anterioridad a la llegada de los nuevos pobladores procedentes de la ciudad. Tiene sentido, por tanto, el describir la aldea, en esas condiciones, como una «comunidad de trabajo». Dado que la mayoría de los agricultores de East Anglia vivía no en el núcleo de la aldea misma, sino en las explotaciones circundantes, la aldea en sí la formaban casi exclusivamente las moradas de los trabajadores del campo. La aldea adquirió así muchas de las características que se dan en otras comunidades de trabajo formadas por las clases obreras: el fuerte sentimiento de la experiencia de trabajo compartida, una distintiva sub-cultura ocupacional, la superposición de roles y lealtades en el trabajo y fuera del trabajo, la importancia de los grupos íntimos de amigos, compañeros de trabajo, vecinos y familiares, y un fuerte sentido de la identidad del grupo en general, que separa a cada comunidad aldeana de sus colindantes. Si nos basamos en la escasa evidencia histórica de que disponemos, también es razonable concluir que las distancias en riqueza material, ingresos, modo de vida y, sobre todo, autoridad, separan definitivamente la comunidad de trabajo de los obreros agrícolas de la red, geográficamente más diseminada, de agricultores locales y propietarios, creando una subcultura y una visión social «de oposición» que son características de similares comunidades de trabajadores entre las clases obreras urbanas, con su latente conflicto de clase aflorando a la superficie de las relaciones diarias. El obrero del campo no solamente estaba profundamente integrado en esta comunidad de trabajo, sino que su status no se le atribuía de acuerdo con sus ingresos o su consumo conspicuo, sino más bien

basándose en su destreza en el trabajo. De esta forma, el obrero agrícola podía ganarse gran parte de la estima y la dignidad que el resto de la sociedad, fuera de los límites de la aldea, le denegaban.

2. La comunidad encerrada

Este sistema de status interaccional está siendo socavado por el proceso de urbanización del campo. Para muchos de los recién llegados, la aldea no constituye el foco de su vida social, puesto que tanto su trabajo como su ocio los llevan fuera de la localidad. Por otra parte, la afluencia de «forasteros» puede afectar rápidamente la naturaleza de la sociedad rural: de repente ocurre (o así lo parece) que no todo el mundo se conoce mutuamente. Además, el recién llegado no entra en la aldea como un individuo en solitario que deba congraciarse con los residentes locales para poder vivir en paz, sino que forma parte de un extenso grupo de inmigrantes cuyos valores, pautas de conducta y estilo de vida, generalmente basados en el modelo propio de las clases medias urbanas, son apreciablemente distintos de los que exhiben los habitantes locales. Enseguida puede surgir entonces una nueva división social, esta vez entre el grupo íntimo de residentes «locales», que constituyen los restos de la vieja comunidad de trabajo, por una parte, y los recién llegados, por la otra. La antigua comunidad de trabajo tiende entonces a replegarse sobre sí misma, volviéndose lo que pudiera llamarse una «comunidad encerrada», ya que ahora los lugareños forman una comunidad dentro de la comunidad, una densa red separada y encerrada dentro de la totalidad del sistema social local.

Cuando los obreros agrícolas hablan de la «pérdida de la comunidad» en su aldea, generalmente se están refiriendo implícitamente a esta clase de cambio; por fuerza han de desarrollarse nuevas pautas de sociabilidad en la aldea, a las cuales no están acostumbrados y de las que se sienten excluidos. Este nuevo elemento también tiende a crear nuevas dimensiones de conflicto social en la población rural, reemplazando la clase rural que era la antago-

nista de la comunidad de trabajo. Como la experiencia reciente de muchas aldeas de East Anglia demuestra, existen amplias oportunidades para que surjan conflictos entre los lugareños y los inmigrantes, sobre todo en materia de vivienda y, en general, en cuestiones relativas al «medio ambiente». Los nuevos residentes amenazan el status de los aldeanos en su propia aldea, puesto que no tienen ni la habilidad ni el conocimiento necesarios para juzgar la destreza de los trabajadores rurales. En lugar de ello, evalúan a los obreros agrícolas y a los otros aldeanos sobre la base de criterios propios de las clases medias urbanas, es decir, consumo conspicuo.

3. La comunidad centrada en la explotación agrícola

Los cambios acaecidos en la naturaleza del mercado de la vivienda rural y en la morfología del abastecimiento de casas (que se considerarán más adelante con más detalle) han tenido como consecuencia el que una proporción creciente de trabajadores del campo viva en «tied cottages» o casillas vinculadas (3). Como por regla general estas viviendas no están situadas en la aldea, sino en la explotación, la «comunidad» para esos trabajadores la constituye la empresa agraria misma. En tal situación, puede hablarse de la «comunidad centrada en la explotación agrícola». La explotación tiende a ser el centro del mundo para el trabajador, separado geográfica y socialmente de la aldea, y sus relaciones con la sociedad aldeana se hacen rutinarias y ejecutivas. La aldea se usa cada vez con más frecuencia exclusivamente por sus servicios (escuelas, tiendas, etc.) más bien que como centro social, mientras que el obrero agrícola, en la explotación, vive en un mundo privado hasta cierto punto, socialmente invisible para el resto de la sociedad. El sentimiento de incomunicación que puede surgir es mitigado por el estrecho contacto con los compañeros de trabajo y los vecinos de otras casillas y por un creciente acercamiento al patrono. En general, las relacio-

(3) El vocablo «cottage» abarca una gran variedad de casitas rurales inglesas. «Tied cottage» se aplica a la modesta vivienda que se le proporciona al trabajador del campo y que, estando vinculada al empleo, ha de abandonarse al cesar éste.

nes entre el agricultor y sus trabajadores se vuelven más informales, más personales y, a causa de su proximidad, más profundas. A pesar del riesgo de que la vida pueda tornarse demasiado claustrofóbica y obsesiva, a los agricultores les resulta fácil, sin embargo, inspirar un cierto grado de lealtad personal en sus empleados y aminorar los antagonismos de clase de la comunidad de trabajo.

Una de las conclusiones sobre las que hice hincapié en *The Deferential Worker*, en consecuencia, era la de que había tenido lugar una reducción en la distancia social entre los agricultores y los trabajadores agrícolas, debida en parte al impacto de los nuevos residentes. A causa de la forma específica en la que los cambios desencadenados por el proceso de urbanización han afectado el sistema social local, el contraste entre el opulento estilo de vida de los recién llegados y la pobreza de los obreros agrícolas no ha incrementado el conflicto entre los agricultores y sus empleados, sino todo lo contrario, puesto que ahora los trabajadores se identifican más con los agricultores que en tiempos pasados. Por ejemplo, ambos grupos pueden hacer ahora causa común y atacar la «intromisión» de los forasteros en los asuntos de la aldea y de las explotaciones. Además, los agricultores por lo menos siguen reconociendo la destreza de los trabajadores, de modo que éstos pueden obtener mayor estima por parte de sus patronos que por parte de los nuevos aldeanos. Esto no quiere decir que las diferencias objetivas en riqueza e ingresos se hayan reducido lo más mínimo, sino que las relaciones se han trocado más fáciles e informales. A esto han contribuido dos factores más. La continua mecanización de la agricultura, junto con otras innovaciones que han reducido la necesidad del factor trabajo, han producido una constante disminución del número de empleados en la explotación agrícola media que ha atenuado la sub-cultura de oposición de los obreros agrícolas, al tiempo que les ha permitido una comunicación más directa con los patronos. Por otro lado, los agricultores se han dissociado de muchos de sus antiguos roles de autoridad, debido en parte a su desplazamiento por los nuevos residentes y en parte a la burocratización y profesionalización del gobierno local. En

consecuencia, los agricultores y propietarios ya no poseen un pasaporte *automático* para el dominio político local (véase Newby y col., capítulo 6).

En cuanto a los nuevos residentes se refiere, en general, no han deseado mal a nadie, de modo que la animosidad que han suscitado ha sido completamente involuntaria e imprevista. En realidad, es difícil adivinar qué es lo que hubieran podido hacer para aliviar el resentimiento que a veces han causado. Si se retiran respetuosamente de los asuntos de la aldea, se les califica de «orgullosos» o «fatuos», y si participan abiertamente se les acusa de querer tomar la aldea «por asalto». Los nuevos habitantes han actuado frecuentemente de chivo expiatorio fácilmente identificable, al que se puede culpar de muchas de las privaciones que sufre la población rural contemporánea, tales como la escasez de servicios, la lejanía de los centros de gobierno, etc. No quiere decirse que la base del conflicto que enfrenta a la población local con los inmigrantes sea ilusoria; lejos de ello. Sin embargo, la distancia social entre los dos grupos y la tendencia consiguiente de cada uno de ellos a estereotipar al otro lo han aumentado. Los efectos del éxodo al campo de la clase media urbana no han sido totalmente nefastos, como puede apreciarse si comparamos una «aldea de "commuters"» (4) con otra que haya sufrido las devastadoras consecuencias de la despoblación rural sin el correctivo de la inmigración urbana. Los cambios operados en la aldea no han sido *causados* tanto por la llegada de los inmigrantes como por el hecho de que la base económica subyacente resulta inadecuada para mantener a la antigua comunidad de trabajo. Las disrupciones causadas por los nuevos residentes han sido simplemente un síntoma tangible de este cambio.

El impacto producido por los nuevos habitantes ha sido considerable, sin embargo, a nivel ideológico, ya que han establecido divisiones sociales nuevas basadas en una serie de conflictos literalmente parroquiales, y han empujado a

(4) «Do-gooder» se usa en sentido irónico para designar a aquella persona que ofrece una ayuda para prestigiarse de benefactora o que, sin pensar seriamente en las consecuencias de su acción, se meten donde no deben.

los empleados rurales a unirse a los patronos contra el «enemigo común». Así, han conseguido consolidar los lazos verticales que relacionan a los agricultores con sus trabajadores, han canalizado hacia ellos mismos muchos de los antagonismos de clase que, causados por la escasez del salario y las condiciones de trabajo, iban dirigidos hacia los patronos, y han hecho posible el desarrollo de una penetrante nostalgia por el pasado, cuando la aldea era una «auténtica comunidad», en lugar de una valoración realista de las causas de la pobreza rural contemporánea. (Compárese la imagen que tienen de la sociedad los agricultores con la de los trabajadores en Newby y col., 1978, págs. 309-313.) De modo que el 92 por 100 de los trabajadores agrícolas entrevistados en Suffolk pensaban que tenían más en común con los agricultores que con otros miembros de la «clase trabajadora», a pesar de que la mayoría de ellos se identificaban con esta clase. La proporción de agricultores que reciprocaban este punto de vista, aunque inferior, todavía constituía mayoría, oscilante entre el 53 y el 74 por 100 de acuerdo con la muestra a la que pertenecían (véase *Idem*, págs. 314-5).

Este ha sido, pues, uno de los efectos principales del proceso de urbanización del campo en East Anglia. Dado que mi interés se centraba en el problema de la ideología, me he concentrado en este aspecto en *The Deferential Worker* y por ello lo que antecede ha sido simplemente una reseña superficial de las líneas principales del análisis presentado allí. Sin embargo, el concentrarse *exclusivamente* en los efectos sociales disruptivos de los nuevos residentes tiende a desviar la atención de otros agentes del cambio social que han sido los responsables de la urbanización de la Inglaterra rural. Por añadidura, tiende a oscurecer el proceso de los varios mecanismos políticos y económicos responsables de la asignación de oportunidades en el campo y en donde los participantes pueden dividirse de acuerdo con criterios diferentes de los que distinguen entre «pobladores locales» y «pobladores recientes». El resto del presente ensayo va a tratar de estos factores más materiales que pueden considerarse en parte causa y en parte efecto también del proceso de urbanización del

campo. Y esto requiere casi el comenzar de nuevo el análisis del cambio social en la Inglaterra rural, aunque esta vez desde una perspectiva diferente. Para entender por qué se ha desencadenado el proceso de urbanización del campo, es necesario un examen previo de la economía rural, y particularmente la agrícola. Esto no implica que los cambios ocurridos recientemente en la vida rural puedan ser considerados solamente desde un punto de vista económico, pues evidentemente, ello no es cierto. El éxodo de las clases medias urbanas no hubiera tenido lugar sin la concurrencia de ciertas premisas culturales acerca de la saludable autenticidad de la vida rural. Pero por otro lado, los inmigrantes no hubieran podido instalarse sin el éxodo de la población trabajadora rural en dirección contraria, éxodo provocado por la continua sustitución de la fuerza de trabajo por el capital en el sistema de producción agrícola. De modo que todavía es necesario considerar la producción de alimentos (junto con las actividades asociadas de manufactura, elaboración y servicios) como el hecho responsable, directa o indirectamente, de la mayoría de los cambios observados en la sociedad rural inglesa. Es por ello por lo que puede apreciarse una unidad en la dirección general del cambio rural social, a pesar de que éste se ha presentado con variaciones considerables de tiempo y amplitud en cada caso particular. Consideremos ahora con más detenimiento esos factores económicos subyacentes.

LA RECONSTRUCCION DE LA INGLATERRA RURAL: EL PAPEL DEL ESTADO

Las condiciones económicas existentes en el sector agrario de hoy presentan un marcado contraste con las que prevalecían en las décadas de los años veinte y treinta del siglo actual, cuando miles de acres de tierra productiva permanecían sin cultivar y degeneraban en eriales, las cercas eran destruidas para ser utilizadas como leña y miles de trabajadores del campo estaban en paro o sufrían reducciones de salario. Desde la segunda guerra mundial, sin

embargo, cualesquiera que hayan sido las fluctuaciones a corto plazo, el Estado ha puesto en ejecución los deseos de la población urbana de una alimentación abundante y relativamente barata (en comparación con el pasado), al tiempo que ofrecía al agricultor garantías de estabilidad y, para el productor «eficiente» (es decir, de bajo coste de producción), beneficios considerables. El Estado también ha actuado de comadrón en lo que ha dado en llamarse la segunda revolución agraria (es decir, las transformaciones ocurridas en la tecnología de la producción de los alimentos y los cambios sociales que se han derivado de ellas). A los agricultores se les ha otorgado unas condiciones bajo las cuales han podido acometer un programa de creciente productividad y eficiencia de costes que no ha tenido igual en virtualmente ninguna otra parte del mundo. El porcentaje de población activa en el sector agrario ha descendido en picado hasta un mero 2,8 por 100, mientras que la productividad del sector se ha cuadruplicado desde antes de la guerra. Las explotaciones han decrecido en número y se han agrandado y especializado, y la agricultura se ha visto transformada de un idílico y decoroso «modo de vida» en una actividad empresarial altamente racionalizada. (Véase las excelentes descripciones de este proceso en Self y Storing, 1962; Donaldson y Donaldson, 1972; Edwards y Rogers, 1974; Beresford, 1975.)

La política agraria ha perseguido un solo propósito: el de producir más alimentos a precios más reducidos. No se ha preocupado en absoluto por las implicaciones sociales del desarrollo de la gran empresa agraria, si exceptuamos el asomo de la inquietud ante la condición de las altiplanicies. En general, existe un alarmante contraste entre el éxito indudable de esta política en relación con los objetivos especificados en los sucesivos Libros Blancos (tales como la expansión de la producción nacional, el aumento de la eficiencia de costes, el mantenimiento de una agricultura próspera) y sus perniciosos efectos *sociales* en el campo, ya sea depopulando las áreas rurales a un ritmo más rápido que el sostenido hasta entonces, o bien polarizándolas socialmente entre los grandes productores en continua expansión y los pequeños agricultores marginales,

entre éstos y los trabajadores del campo que han tenido que soportar una inadecuada provisión de servicios, e indirectamente, entre los habitantes locales pobres y los opulentos nuevos residentes. Estos efectos sociales han sido raramente verificados, mucho menos tenidos en cuenta, en los cálculos de la política del Ministerio de Agricultura, donde la conjetura de que lo que es bueno para los agricultores debe ser bueno para la población rural en general, se ha perpetuado debido a una mezcla de «intereses comerciales y burocráticos establecidos, autojustificación y reacia necesidad», como Josling (1974, pág. 231) ha escrito. A pesar de toda la evidencia acumulada en contra se ha tardado tres décadas en cuestionar la validez de esa hipótesis, e incluso todavía ahora permanece como dogma de fe. Así, aunque el Ministerio ha nombrado recientemente «consejeros socioeconómicos» con la misión de considerar las implicaciones sociales generales del cambio agrario, lo ha hecho simplemente como una obligación bajo la política agraria de la C. E. E. Aquéllos pueden ser considerados a lo sumo como los «benefactores» (5) de A. D. A. S., el servicio de extensión del Ministerio, y son tolerados, aunque, cuando han de tomarse las decisiones duras, ignorados por completo. En un principio, al menos, eran en su mayoría ex consejeros de A. D. A. S. en trance de jubilación, empapados en el pensamiento convencional del Ministerio, y sin saber a ciencia cierta en qué consistía su trabajo. De modo que tienden a aceptar el punto de vista de que la vitalidad de la sociedad rural inglesa puede medirse en relación con la prosperidad de los agricultores ingleses.

Dado que los agricultores forman una variable, aunque significativa, proporción de la población rural, esta aserción es verdadera hasta cierto punto. Pero no todos los sectores de la población rural se han beneficiado de la misma forma con la política agraria de posguerra, y algunos incluso han salido *relativamente* perjudicados. El pequeño agricultor estaría en desacuerdo con la opinión convencional, al igual que el trabajador agrícola y su mujer, el

(5) Ministry of Agriculture, Fisheries and Food.

estudioso del medio ambiente, la juventud rural que se encuentra en paro al finalizar su educación escolar, e incluso los jóvenes esposos a la espera de una casa del Ayuntamiento. En la economía política de la agricultura moderna se puede seguir perfectamente la cadena de eventos que conduce a los problemas que cada uno de estos grupos encuentra; y, sin embargo, la formulación de la política agraria ha ignorado las posibles consecuencias externas o, en el mejor de los casos, ha sido indiferente a ellas. Esto se debe, en gran medida, a la división del trabajo que opera dentro de la administración pública, y que ha permitido al Ministerio de Agricultura el responder a una clara e inequívoca demanda en la reducción del coste de producción de los alimentos, dejando la reparación de las consecuencias sociales de tal política al cuidado de otros ministerios y departamentos a nivel nacional y local. La mayoría de la población, predominantemente urbana, ha demostrado escaso interés, además, por el cambio rural, a no ser en sus elementos más visibles (el proceso de sustitución de los cercados de árboles y arbustos, etc.), mientras los alimentos permaneciesen baratos. También se ha mostrado indiferente ante los problemas sociales rurales, ya que su percepción de los mismos ha estado frecuentemente empañada por sentimientos equivocados. Mientras que la política agraria produjese los resultados apetecidos, lo que ocurriese con el tejido social rural podía ser ignorado con complacencia.

En cuanto a la formulación de la política agraria del período inmediato a la posguerra se refiere, a pesar de que estimuló un rápido cambio tecnológico, puede decirse que sus implicaciones sociales para el campo no fueron seriamente consideradas. Ello fue debido a que su cimentación, fundamentalmente retrospectiva, se construyó sobre la base de experiencias tan contrarias como la depresión agrícola del período de entreguerras y la necesidad de maximizar la producción de alimentos a toda costa durante la segunda guerra mundial. El conjuro de una u otra siempre podía ser usado para acallar cualquier crítica, viniese de dentro o de fuera de la industria agraria. La abundancia de las décadas siguientes aseguró también que el coste del

apoyo a la agricultura no molestase la conciencia del contribuyente y no fuese, por tanto, examinado a fondo. A pesar de que el resultado final fuese una crónica superproducción, o el haberles proporcionado un «lecho de plumas» a los «barones de la cebada», los precios al consumidor eran bajos y la proporción del gasto público destinada a la agricultura tan pequeña que el ingreso adicional requerido apenas se notaba. En la década de los setenta, sin embargo, el ambiente político que rodea la agricultura ha cambiado dramáticamente. La entrada en la C. E. E. ha supuesto que la carga del apoyo a la agricultura haya pasado del contribuyente al consumidor y ello, junto con la inflación general de la economía británica en esta década, ha asegurado que el coste de producción de los alimentos se haya convertido de nuevo en un tema político candente. Ahora que el coste de la superproducción es soportado directamente por el consumidor, hay un creciente resentimiento contra la ayuda proporcionada a los agricultores «no eficientes», ya sean británicos o, con más frecuencia, continentales. Los aspectos puramente defensivos de la política agraria han soportado una creciente presión política; en recientes debates se destaca la necesidad de proteger al consumidor más bien que al productor. Esto ha fortalecido todavía más a los grandes productores desde el punto de vista político, a pesar de que se benefician desproporcionadamente de la ayuda estatal, ya que pueden recalcar su superior eficiencia de costes y su potencial de expansión en base a considerables inyecciones adicionales de capital de inversión. Tal reacción política ante el problema de la inflación continúa siendo debatida, sin embargo, sin tener en cuenta el futuro de la sociedad inglesa rural.

Dentro de la población rural pueden distinguirse fácilmente los grupos que más se han beneficiado con la política agraria de la posguerra. La promoción de «eficiencia» ha supuesto pingües beneficios para los productores a gran escala, que se han quedado con la parte del león de los subsidios agrícolas (ver Donaldson y Donaldson, 1972). El masivo programa de capitalización ha repercutido también en beneficio de gran parte de las industrias agroquímicas y

de maquinaria agrícola, e incluso en la construcción. Los obreros agrícolas, en cambio, han mejorado *relativamente* muy poco (ver Newby, 1977, capítulo 3). Los economistas agrarios, por otra parte, están ahora de acuerdo en que los propietarios (que son agricultores en su mayoría) han sido uno de los grupos principales de beneficiarios. Así, al analizar la política agraria de los países desarrollados, Josling ha puesto de manifiesto que:

«La conclusión predominante es que la tierra, siendo el factor de menor elasticidad de oferta, da el mayor rendimiento por unidad, y por ende, por valor de activo del capital del cual se obtienen los servicios de dicho factor. Aunque ello no siempre ocurra en cada empresa particular, y pueda ser modificado a largo plazo con la introducción de tecnología que permita liberar el factor tierra, el impacto de estas conclusiones ya forma parte del cuerpo de conocimientos en materia de política agraria» (Josling, 1974, pág. 247).

Dicho de otro modo, el intervencionismo sostenido en la agricultura no solamente ha garantizado los ingresos de los productores «eficientes», sino que ha aumentado el valor de inversión de la tierra agrícola; esto es lo que ha determinado el renovado interés de las instituciones de la City. Ciertamente, la inflación de precios de la tierra, que ha superado constantemente la tasa general de inflación desde la guerra, ha incrementado considerablemente la riqueza del propietario agrícola (ver Newby y col., 1978, capítulo 3). Es patente que la política agraria de este país no se ha preocupado de la justicia distributiva.

Mientras que la política agraria promovía la transformación de la Inglaterra rural desde dentro, un nuevo grupo de medidas de política regional era diseñados para preservarla y protegerla de la amenaza externa de la invasión urbana. El objetivo de la planificación rural y urbana era el de preservar la calidad de la vida rural en el período de posguerra, de la misma forma que el de la política agraria era el de proveerla de una base económica firme. En

teoría, el sistema creado por el Decreto de Planificación Rural y Urbana de 1947 implicaba una reforma radical del enfoque de *laissez-faire* que había predominado en la utilización del suelo en el campo. Los propósitos políticos subyacentes eran liberales y progresistas, con un fuerte elemento de planificación para los nuevos afortunados, pero en la práctica el sistema creado ha conseguido el efecto contrario de una manera casi sistemática. (Véase el juicio de Hall y col., 1973.) Ello ha ocurrido por diversas causas. La primera está relacionada con la naturaleza esencialmente negativa y protectora de la planificación rural en general. La tradicional reverencia inglesa para con el modo de vida rural ha aseverado que precisamente *aquello* que se trataba de proteger no haya sido nunca examinado a fondo. Se ha creído erróneamente que el «modo de vida tradicional» era beneficioso por igual para todos los habitantes rurales, suposición influyente pero sin comprobar que ha sido el producto de la impía alianza entre los agricultores y propietarios que controlaban prácticamente la Inglaterra rural y los reformadores radicales procedentes de las clases medias que formularon la legislación de posguerra. Como consecuencia, a la agricultura se le dio prioridad en cuanto a la utilización del suelo y de la fuerza de trabajo en las áreas rurales se refiere, y fue dispensada de muchos aspectos de la planificación del desarrollo. El objetivo de la política agraria de promover una agricultura *eficiente* fue traducido, en términos de planificación regional, en el deseo de promover una agricultura *ubicua* sin tener en cuenta la distribución subsiguiente de costes y beneficios. El restringir las posibilidades de localización de industrias en las áreas rurales a raíz de esta política sólo podía conducir a la disminución del nivel salarial en el campo, el incremento en la emigración de la población agrícola y la puesta en entredicho de la viabilidad de los servicios rurales.

Hacia finales de la década de los sesenta, muchos de los planificadores rurales se dieron cuenta de estos problemas. Uno de los principales funcionarios de planificación regional, Ray Green, arguyó incluso que

«los... años que han transcurrido desde que se promulgó el Decreto de Planificación Rural y Urbana de 1947, representan dos décadas de oportunidades para una planificación rural *positiva* que han sido malgastadas» (Green, 1971, pág. 1).

En el Decreto de Planificación Rural y Urbana, de 1968, se vislumbraron algunas tentativas para remediar esta situación. El Decreto introdujo un sistema de planes estructurales que abarcaban no solamente la utilización del suelo, sino también los cambios de población, empleo, transporte y vivienda, y que trataban de poner en práctica un desarrollo positivo de los recursos de las áreas rurales, en lugar de ser un reflejo de la anterior política de planificación, predominantemente negativa. El énfasis en la producción de mapas era menor, yéndose hacia la valoración de los pertinentes factores económicos y sociales (hasta que fue cercenada por las reducciones del gasto público de 1974). El sistema de planes estructurales ofrecía también el medio de superar la disyuntiva campo-ciudad, aunque ello no se hizo posible hasta la reorganización de la administración local de 1973/74. Sin embargo, la distancia que separa la evidencia descubierta por los estudios de los planes estructurales de la política que ha sido finalmente puesta en práctica, ha sido considerable. En 1976, por ejemplo, la Comisión para el Campo hubo de comentar en su *Informe Anual* que

«el contenido general de los planes estructurales no nos ha convencido de que el potencial que el nuevo sistema contiene para afrontar los problemas rurales haya sido ejecutado».

La razón de ello estriba, como veremos, no tanto en la mentalidad de los propios planificadores rurales, como en el equilibrio de fuerzas políticas que forman la base del proceso de decisión en los ayuntamientos.

La opinión de que el campo debe reservarse, casi exclusivamente, para la agricultura, ha asegurado que la mayor fuente de empleo en las áreas rurales desde 1947 haya

sido la actividad agraria. Y, sin embargo, como hemos visto, las oportunidades de empleo en este sector han disminuido rápidamente desde la guerra (factor que se había incluido explícitamente en la política agraria estatal). La política de planificación estratégica convencional de apartar deliberadamente de las áreas rurales el nuevo desarrollo industrial ha acarreado dos importantes consecuencias: la restricción de la tasa de desarrollo económico en el campo y la debilitación de la posición negociadora de los obreros rurales a la hora de los convenios salariales, debido a la reducción de la demanda de trabajo. Puede decirse, pues, que la planificación estratégica ha contenido un fuerte elemento de planificación en beneficio de los intereses de las clases acomodadas. Los patronos rurales han sido favorecidos con la preservación de una economía de bajos salarios rurales, que ha sido fomentada incluso, indirectamente, en algunas áreas. La población ex urbana, que ha ocupado el vacío dejado por los obreros rurales al salir en busca de trabajo y de mejores condiciones salariales en las ciudades, lucha incesantemente ahora para proteger el campo de toda contaminación de desarrollo industrial y preservar así la «aldea de sus pensamientos» (Pahl, 1965), y como secuela, disfrutar, por añadidura, la oportunidad de disponer de una bolsa local de trabajo barato que realice la serie de servicios domésticos requeridos normalmente por las clases medias altas. Los trabajadores agrícolas, por otra parte, están atrapados en una industria de bajos salarios y menguadas oportunidades de empleo, y dependen en medida creciente de viviendas vinculadas (6). La política de preservar el *status quo* rural ha resultado ser, en práctica, *redistributiva*, pero de una manera altamente regresiva. En ocasiones, los planificadores rurales se han dado cuenta de estas tendencias, pero ha faltado la

(6) Aunque la enseñanza escolar se imparte siguiendo la división tradicional de escuela primaria (de los cinco a los once años) y secundaria (de los once a los dieciséis o dieciocho años) en la mayor parte de Inglaterra, en algunos condados o distritos existen tres clases de escuelas desde la «unificación» de la educación («comprehensive») de los años sesenta —primera (cinco-ocho/nueve años), intermedia (ocho/nueve-doce/trece) y segunda (doce/trece-dieciséis/dieciocho)—: lo cual permite hacer uso de los edificios escolares existentes, relativamente pequeños en algunas áreas.

voluntad política necesaria para cambiar de curso. En 1975, por ejemplo, el informe del Equipo de Planificación Estratégica Regional de East Anglia recalcó la necesidad de atraer más industrias a la región para elevar el nivel de los salarios locales:

«Lejos de los grandes centros, las escasas posibilidades de empleo causan considerable preocupación local. Las oportunidades se limitan al empleo agrícola y los ingresos tienden a ser bajos... Todo el mundo debería tener la oportunidad de incrementar sus ingresos y ampliar sus posibilidades en virtud de mejores opciones de empleo y de oportunidades de aprendizaje.»

El informe fue recibido con considerable antagonismo en los ayuntamientos rurales, y posteriormente, arrinconado silenciosamente por el Departamento del Medio Ambiente, que había criticado públicamente muchas de sus conclusiones.

La política agraria y la política de planificación tenían como finalidad el proveer el marco para la reconstrucción de la Inglaterra rural a partir de los estragos acaecidos durante la Depresión. (Por supuesto que no fueron las *únicas* políticas operativas, pero en este ensayo me he centrado en ellas por falta de espacio.) Desde varios puntos de vista, estas políticas han tenido un éxito extraordinario, como nos demostraría fácilmente cualquier comparación entre la situación actual y la que prevalecía en la década de los treinta. Sin embargo, este abreviadísimo y general estudio trata de destacar algunos de sus aspectos menos obvios y de los que menos se habla públicamente. En primer lugar, es aparente que la política agraria y la de planificación no solamente están separadas institucionalmente, sino que trabajan en direcciones opuestas: mientras que el MAFF (7) ha estado promoviendo un extenso cam-

(7) En el campo de la medicina pública (el «National Health Service») es creciente la tendencia a agrupar un mínimo de tres doctores en cada consulta, por economía y facilidad de turnos de guardia, etc.

bio tecnológico, con la consiguiente disminución de la población activa agraria, la planificación rural ha sido fundamentalmente preservacionista. La colisión inevitable de estas políticas está teniendo vigencia ahora con relación a cuestiones del paisaje y del medio ambiente. En segundo lugar, ambas políticas tienden a ser socialmente regresivas en lo que afecta a la población rural. En tercer lugar, han permitido que el cambio en la composición social de la sociedad rural haya tenido efecto virtualmente sin impedimentos y sin una apreciación de sus consecuencias para con los retazos de la vieja comunidad de trabajadores rurales, que se han convertido en una población *residual*, en los restos del naufragio del cambio agrario, abandonados en el campo, sus necesidades constantemente ignoradas ahora que son minoría. Pero para apreciar realmente la amplitud de estos cambios, es necesario ver cómo aquellas políticas han sido ejecutadas a nivel local. El Estado ha proporcionado el marco que serviría de guía al cambio social rural: pero sólo eso. Muchas de las consecuencias de la urbanización del campo son el resultado de presiones políticas locales y del uso rutinario del poder político local.

LA RESPUESTA LOCAL

La ejecución de la política agraria estatal se ha dejado, generalmente, en manos de agricultores y propietarios particulares. La política de planificación a nivel local, sin embargo, ha estado formalmente bajo la égida de concejales electos, asesorados por funcionarios profesionales. Aunque, a nivel nacional, estas políticas permanecen todavía separadas institucionalmente, son coincidentes, sin embargo, con frecuencia, debido al dominio tradicional del gobierno local en áreas rurales por parte de los agricultores (véanse los detalles en Moss & Parker, 1967). En general, el poder político en las áreas rurales permanece firmemente en manos de los residentes más prósperos, aunque el equilibrio de fuerzas políticas varía de un lugar a otro y es cambiante a largo plazo. En ciertos distritos, ello ha implicado la continuación del dominio tradicional de la

clase terrateniente, aunque su omnipotencia ha decaído claramente; en otros, han sido desplazados del gobierno local por profesionales y ejecutivos pertenecientes a las recién llegadas clases medias urbanas, que *parecen* amenazar su hegemonía. Sin embargo, la evidencia recogida en nuestro estudio sobre el poder político local en Suffolk (Newby y col., 1978, capítulo 6) sugiere que estas apariencias son engañosas. Hay una notoria continuidad, si no en términos de personal, sí en términos de *política*. Los nuevos residentes apoyan decididamente la postura preservacionista de la política de planificación estratégica con relación al campo. No tienen intenciones de admitir ninguna clase de desarrollo industrial, o incluso de la construcción, que en algunos casos, es precisamente de lo que trataban de escapar al ir a vivir en un área rural. De hecho, su ardorosa defensa del *status quo* los pone frecuentemente en conflicto con los agricultores en relación con las consecuencias para el medio ambiente de las modernas prácticas agrícolas. Asimismo, siendo los principales contribuyentes (ya que las fincas agrícolas están exentas), suscriben entusiásticamente la extremadamente conservadora política presupuestaria que constituye el punto principal del programa político de los agricultores y propietarios a nivel local. Ambos grupos son, pues, profundamente preservacionistas en política y están de acuerdo en excluir del campo prácticamente todo desarrollo industrial o residencial, ya sea por razones agrícolas o medioambientales. Esta política ha triunfado así, a pesar de los cambios de personal acaecidos en los comités de planificación de los ayuntamientos. No es coincidencia el que muchos de los conflictos típicos en planificación rural hayan estado relacionados con el impacto de decisiones tomadas a nivel nacional en particulares localidades rurales (Stanstead, Cublington, Drumbuie, etc.), ya que han sido las únicas ocasiones en las que la rutina de la política de planificación rural se ha visto perturbada. En otros casos, la alianza operativa de propietarios y nuevos residentes continúa en muchos ayuntamientos con la faena diaria de alejar del campo las propuestas de desarrollo.

Se pueden seguir los efectos de estas políticas sobre

toda la gama de los recursos utilizados por la población rural (empleo, educación, sanidad, servicios sociales, etc.); pero, dada la falta de espacio en un trabajo de esta clase, voy a centrarme en uno solamente: vivienda. Como caso ilustrativo del impacto de los nuevos residentes sobre la población local, el problema de la vivienda es un ejemplo oportuno. Este recurso no es solamente crucial de por sí, sino que además toda la población rural (habitantes locales y nuevos residentes, agricultores y empleados, familias agrícolas y de fuera del sector) compite por él. (No se podría decir lo mismo acerca del empleo, pongamos por caso.) De modo que ejemplifica vivamente el impacto de los recién llegados en la distribución de los recursos materiales. Por añadidura, el sistema de asignación de la vivienda actúa como intermediario entre los cambios agrarios y la estructura de la sociedad rural, debido a su poder de decidir *dónde* vive cada cual. En consecuencia, la vivienda ha sido siempre utilizada en el campo como una forma de control social (ver Newby, 1977, capítulo 3).

Durante el siglo XIX se mantuvo una escasez crónica de viviendas en las áreas rurales por miedo de que un número excesivo de ocupantes se convirtiese en una carga demasiado pesada para las instituciones de beneficencia locales. La escasez ha continuado en el siglo XX, al reafirmarse muchos de los principios que constituían la médula de este problema dentro de un nuevo marco institucional. Así, hasta la llegada de los nuevos residentes, el control de las áreas rurales por parte de los agricultores y propietarios, en calidad de patronos y de concejales locales al mismo tiempo, aseguró que ellos fuesen en la práctica los arrendadores de las viviendas asequibles a la mayoría de los obreros agrícolas: casas municipales, casas en arriendo de particulares y casas vinculadas. Su deseo de mantener un bajo nivel de contribución les hizo remisos a la hora de construir casas municipales; en su defecto, los obreros agrícolas podían ser acomodados en casas vinculadas, que además de proporcionar una apropiada vivienda, tenían otras ventajas, como la de reforzar las relaciones de dependencia. También implicaron una reducción en los salarios agrícolas, lo cual supuso que los trabajado-

res no podían ya permitirse el lujo de alquilar casas municipales. La disminución de los alquileres sólo hubiera sido posible mediante un aumento de las contribuciones, a lo que se oponían los agricultores; por otra parte, no iban a elevar voluntariamente los salarios tampoco, simplemente para que sus trabajadores pudiesen vivir en casas municipales. Consecuentemente, bien como contribuyentes o bien como patronos, los agricultores que controlaban la mayor parte de los ayuntamientos rurales estimaron conveniente el construir el menor número de casas municipales posible. Estas tendencias han permanecido inalteradas por la llegada de los nuevos residentes (de hecho, su impacto sobre la vivienda rural ha sido, en otros aspectos, calamitoso). En 1974, en vísperas de la reorganización de la administración local (y de la desaparición de estadísticas separadas de la vivienda para las áreas rurales), los ayuntamientos rurales proporcionaban solamente un 20 por 100 de la vivienda rural, en comparación con el 31 por 100 de que disponían otras autoridades locales. La dependencia de los trabajadores agrícolas de casas vinculadas se ha incrementado desde la guerra de un 32 por 100 a un 54 por 100, al tiempo que el fondo de casas particulares disponibles para arrendamiento disminuía como consecuencia de los efectos de sucesivos Decretos sobre Arrendamientos y de la lucrativa venta de casas a los nuevos residentes. Teniendo en cuenta el historial de las disponibilidades de vivienda rural, resultaba irónico que los cambios propuestos en la legislación de las casas vinculadas fuesen atacados en 1976 por el grupo de presión agrario, paradójicamente, en base a que no había suficientes salvaguardas contra las autoridades locales que se resistiesen a cumplir con sus responsabilidades en materia de la vivienda.

Desde la segunda guerra mundial, sin embargo, el control político de los ayuntamientos rurales no ha sido el único factor que ha influido en el ritmo de construcción de viviendas rurales. Una importante característica de este período ha sido también la incorporación del problema específico de la vivienda rural al problema general de la vivienda nacional, junto con un creciente intervencionismo y control en el abastecimiento de la vivienda rural por

parte del gobierno central (ver Rawson y Rogers, 1976). Los ayuntamientos rurales se han visto paralizados por las restricciones de gasto público y por criterios económicos de coste que rara vez tienen en cuenta las dificultades peculiares de los distritos rurales remotos. A esto se ha añadido un cambio en el énfasis de la política de la vivienda. En el período de entreguerras, el propósito de la legislación de la vivienda había sido el de estimular la construcción del mayor número posible de casas en las áreas rurales; pero desde 1947 el objetivo ha sido el de controlar el número de casas construidas en ellas, como parte de la política general de planificación destinada a contener la expansión urbana, evitar la pérdida de tierra agrícola de buena calidad y proteger la cualidad estética del campo. Lejos de estimular la construcción de más casas rurales por parte de autoridades locales y contratistas particulares, como en la década de los treinta, se les ha disuadido deliberadamente mediante la imposición de un estricto control de los proyectos, en particular los referentes a la construcción en pleno campo y en otras áreas sensitivas como los Cinturones Verdes o las Areas de Prominente Belleza Natural. La creciente riqueza de la población rural fraguada por el éxodo de las clases medias urbanas ha tendido a enmascarar los continuos y severos reductos de pobreza que existen en el campo y ha hecho posible el que el «problema» de la vivienda rural sea contemplado más bien como una cuestión de planificación en la utilización de la tierra que como un problema relativo al bienestar social.

De modo que puede decirse que, desde el Decreto de 1947, la concesión de permisos de planificación para la construcción de viviendas rurales ha estado guiada ante todo por la preocupación del aspecto estético del campo, más bien que por la de aliviar el problema de la vivienda de la población rural. El estricto control de la edificación de casas rurales de esta política ha tenido como consecuencia la escasez planificada de viviendas que, ante la creciente demanda por parte de los nuevos residentes, ha hecho de la vivienda rural un bien deseable a un precio superior. Hasta los primeros años de la década de los

sesenta, los efectos de la despoblación rural, la dilapidación de gran parte de la propiedad rural y el coste del transporte a los centros urbanos contribuían a que el precio de la vivienda rural permaneciese bajo en comparación con las áreas urbanas. Pero a medida que la vivienda rural excedente era gradualmente absorbida por los «commuters» y los dueños de una segunda casa, y se restauraban y renovaban moradas que habían constituido una acusación concluyente de los años de abandono y privación, la escasez relativa comenzó a empujar los precios por encima de los correspondientes a casas suburbanas, e incluso urbanas, de similar calidad. De modo que las presiones que actúan sobre la construcción rural se han intensificado considerablemente. De 1961 a 1971, el censo de la población rural registró un incremento de 1.700.000 personas, y aunque parte de ello se justifica por la extensión del desarrollo urbano sobre la demarcación de distritos rurales contiguos, no hay duda de que las presiones de población experimentadas en la mayor parte de la Inglaterra rural no están ya relacionadas con la despoblación rural, sino que, al contrario, son el resultado de una creciente demanda. Pero la solución no se ha buscado en la construcción de viviendas para aliviar la presión inflacionista sobre precios y alquileres, sino en la imposición de controles aún más estrictos: áreas de conservación, aldeas «cercadas», etc. A medida que los precios ascienden inexorablemente, el sector de la población que consigue su deseo de tener una casa en el campo se restringe socialmente cada vez más.

A pesar de que no fuese esa su intención, los controles de planificación de la vivienda rural se han convertido, de hecho, en instrumentos de exclusivismo social, aunque ello depende por lo menos tanto de la manera de ejecutarlos como de los principios mismos que la legislación encierra en sí. Por ejemplo, la insistencia en el uso de ciertos materiales de construcción, las normas de diseño y de acabado exterior y la densidad de casas en las áreas residenciales reflejan la preocupación tradicional de las autoridades de planificación por el aspecto de las casas y las aldeas, más bien que por la gente que ha de vivir en ellas. Y así, el que las casas hayan de ser construidas «sin

menoscabo del carácter de la aldea», se traduce con frecuencia en casas de elevado coste y baja densidad, diseñadas por arquitectos para las clases medias altas. A medida que el grupo de presión del medio ambiente se ha ido consolidando como una fuerza influyente en la formulación de la política de control del desarrollo rural, la disyuntiva de las exigencias de mantener un paisaje aldeano atractivo frente a la necesidad de proveer de viviendas rurales a los que carecen de ellas se ha ido exacerbando. El dilema se ha agudizado debido a que muchos de los llegados recientemente a las aldeas no solamente pertenecen a la vanguardia del grupo de presión del medio ambiente, sino que son también explícitamente exclusivistas en sus preferencias sociales: una vez han conseguido entrar en su fortaleza rústica, pretenden alzar el puente levadizo detrás de ellos y dejar la irritante chusma fuera, en las listas de espera de casas municipales. Con frecuencia se oponen a *toda* construcción residencial, pública o privada, y, dado que el esnobismo suele estar a flor de piel de su discernimiento, resienten en particular la construcción de nuevas zonas residenciales municipales en el campo: en este caso, la charlatanería del medio ambiente y la búsqueda de exclusivismo social se dan la mano.

Aunque algunos planificadores rurales son conscientes de que estas políticas están exacerbando la escasez de viviendas rurales y consiguen relativamente muy poco para aquellos que más lo necesitan, en la mayor parte de los distritos falta la voluntad política necesaria para remediar la situación. Aquí el papel de los nuevos residentes ha sido decisivo. Siendo los principales representantes en el campo del grupo de presión del medio ambiente, han empujado la ejecución del control del desarrollo en la dirección de una mayor restricción, más bien que en la de una mayor flexibilidad. De modo que, en lugar de atender a las necesidades de la población rural, la política de la vivienda sigue preocupándose ante todo por la calidad visual del campo. Así concluyen Rawson y Rogers su análisis de la política reciente:

«La reducción, en general, de los métodos de

planificación de la vivienda rural a un mero control de la construcción y la preocupación por el tejido de edificios en el campo son dos características que impregnan no ya la política, sino la actitud misma de la planificación estructural de la vivienda rural. Raramente se considera en los planes algo más que los simples atributos espaciales de las construcciones. La calidad de la vivienda es examinada normalmente con relación al área, más bien que con referencia al grupo social, y la información sobre escalas de ingresos en el campo y sobre las diversas necesidades y demanda de vivienda de los diferentes grupos es muy escasa. Lo cual es sorprendente si se tiene en cuenta la importancia que se da normalmente a las necesidades de vivienda locales, y que sólo se pueden definir satisfactoriamente con relación a un conocimiento de los grupos sociales y una información adecuada sobre sus ingresos.

»De aquí se sigue que la política de la vivienda rural no considera las implicaciones sociales que pueden resultar de su puesta en ejecución. Apenas si se discuten, por ejemplo, el posible efecto distributivo sobre los diferentes grupos sociales de la política de conservación de la vivienda rural, o las consecuencias económicas y sociales para la vivienda rural de las estrategias fundamentales de colonización» (Rawson y Rogers, 1976, pág. 17).

La actual política de la vivienda está produciendo la polarización de la población rural. Mientras que las *demandas* de los ricos pueden ser satisfechas en el marco de la política de la vivienda, las *necesidades* de los pobres se ven crecientemente frustradas. En la década de los setenta, la provisión de vivienda rural para aquellos que no pueden participar en un mercado en inflación ha sido irrisoria. Entre 1963 y 1973 el número de casas municipales construidas anualmente en áreas rurales descendió a casi la mitad (de 35.000 a 18.000), mientras que el sector pri-

vado permaneció estacionario, ligeramente por encima de las 70.000. Desde 1973, con la transferencia de recursos de la vivienda (y de subvenciones concedidas por el gobierno central a los ayuntamientos, lo cual es igualmente relevante) a las secciones centrales de las grandes urbes, las condiciones no han mejorado. El resultado es que, una vez que los que son incapaces de adquirir una vivienda, o los que evitan las casas vinculadas, han conseguido sortear el laberinto de obstáculos y normas de elegibilidad, y obtienen un puesto en la lista de espera del ayuntamiento para poder alquilar una casa municipal, se sitúan, después de todo, en una cola que crece ahora con mayor rapidez que el número de casas disponibles, y que en algunos casos supera el número total de familias alojadas por el ayuntamiento. (Véase la evidencia para East Anglia en Newby y col., 1978, capítulo 6.)

El caso de la vivienda ilustra uno de los principales procesos que han acompañado la urbanización del campo: su polarización social. Esta se ha expresado hasta aquí en términos de «aldeanos» y «nuevos residentes», lo cual es, sin duda, correcto a nivel ideológico, sin duda. Pero al nivel de la distribución de oportunidades y del acceso a recursos materiales, la polarización tiene lugar entre una mayoría opulenta (de nuevos residentes y agricultores y propietarios locales) y una minoría pobre, *relativamente* desposeída. La naturaleza *transversal* de estas divisiones ha hecho que el resentimiento de la minoría desposeída se dirija contra los nuevos residentes. Sin embargo, aunque éstos han provocado una reacción visceral, al sentirse aquella minoría avasallada por desconocidos y ricos forasteros, el centrar la atención exclusivamente en ellos nos impediría percibir el hecho de que la vivienda rural no es solamente una cuestión de (creciente) demanda, sino de oferta y necesidad. Aquí, el antagonismo contra los recién llegados, expresado como una tangible manifestación del problema de la vivienda rural (en relación con la adquisición de una segunda casa, por ejemplo) implica que el papel de los terratenientes y agricultores en la ejecución de estas políticas apenas sea observado.

LA POLARIZACION Y LOS DILEMAS DEMOCRATICOS

La polarización social del campo ha constituido un lento pero inexorable proceso desde el final de la segunda guerra mundial. Dentro del sector agrario, los agricultores y propietarios se han beneficiado a expensas del pequeño productor marginal y del trabajador agrícola. Al mismo tiempo ha surgido en la mayoría de las aldeas un fuerte contraste entre una clase media de inmigrantes ex urbanos, comparativamente acomodada, y los restos de la antigua población rural, amarrados a la localidad por su empleo (de salarios bajos), avanzada edad o carencia de recursos para iniciar un desplazamiento. El primer grupo vive en el campo básicamente por decisión propia (y lo mismo puede decirse de la mayoría de agricultores y propietarios) y posee los recursos necesarios para solucionar los problemas de distancia y de acceso a los servicios esenciales. Como contraste, el último grupo está crecientemente atrapado por la falta de acceso a otra clase de empleo y de vivienda y a la gama entera de servicios, cuyo disfrute da por sentado el resto de la población. Aunque no hay duda de que las condiciones materiales de los pobres rurales, los ancianos, los inválidos y otros grupos de menesterosos han mejorado considerablemente en términos absolutos desde la guerra (en el sentido de que ahora están mejor alimentados, vestidos, guarecidos y educados), lo cierto es que en términos relativos han mejorado muy poco, y en muchos casos han sufrido un alarmante deterioro en años recientes. Su pobreza queda sumergida, social e incluso literalmente invisible, y existe el peligro de que, a medida que la Inglaterra rural se transforma en la Inglaterra de las clases medias, su situación sea ignorada y sus necesidades pasadas por alto.

Este proceso de polarización se puede observar no sólo en las áreas de vivienda y empleo, sino en todo el abanico de servicios sociales, los de salud pública en particular, e incluso en la provisión de servicios corrientes, desde tiendas hasta alcantarillado. Los sectores acomodados de la población rural, por supuesto, pueden solucionar cualquier

problema que surja con entrar en su coche y conducir hasta la ciudad más cercana, mientras que los pobres, ancianos e inválidos son particularmente vulnerables a toda merma en el nivel de servicios públicos y privados locales, y sobre todo de transporte público. Ya no tiene sentido (si alguna vez lo tuviera) el comparar el subdesarrollo de los servicios rurales con los que se ofrecen en la ciudad, puesto que la mayor división es la existente *dentro* de la población rural entre los necesitados, que sufren de múltiples privaciones sociales, y los que pueden beneficiarse de la vida en el campo en años recientes y para los cuales el acceso a toda una serie de servicios y amenidades no presenta ningún problema. Numéricamente, este último grupo ha sido el que ha estado creciendo sin cesar durante los últimos treinta años y el que ha conseguido agarrarse con firmeza a los resortes del poder político local. A resultas de ello, la sección de los necesitados ha encontrado cada vez más difícil el conseguir que sus necesidades sean reconocidas, y mucho más aún el sentirse capaz de desviar hacia ella una mayor proporción de los recursos. La economía de la provisión de servicios públicos ha sufrido como consecuencia de la confianza en el esfuerzo personal y de la seguridad de que disfrutaban los nuevos residentes, quienes han demostrado, como contribuyentes, una comprensible renuencia a correr con los crecientes gastos en pro de sus vecinos menos afortunados. Esta es, con demasiada frecuencia, la realidad política que da pie al abandono de la vivienda, el transporte público y la completa gama de servicios sociales, de sanidad y de bienestar en las áreas rurales.

En un período de austeridad general en el gasto público, la presión para conservar solamente aquellos servicios que «pagan» (es decir, que se sostienen económicamente sin necesidad de subvenciones) se ha hecho cada vez más fuerte. Ayton ha examinado así las consecuencias de esta política para la población rural de Norfolk:

«Las oportunidades de cambio en el contexto rural se ven constreñidas e influenciadas por la infraestructura física existente, en términos del

modelo de poblado, sistemas de servicios públicos y redes de comunicación y de los recursos disponibles para su modificación. Aunque es difícil de prever el nivel de recursos financieros de que se podrá disponer, está claro que será limitado durante cierto tiempo aún, y que las políticas de planificación deberán enmarcarse en el contexto de lo que sea factible o razonablemente probable. Los servicios que se financian a partir de la contribución (como educación, carreteras, alcantarillado, agua) se verán mucho más restringidos que aquellos que no necesitan subvención y se presupuestan a escala nacional (electricidad, gas, teléfonos). Las opciones de inversión en aquellos sectores que puedan influir en la formulación de la política deberán hacerse de una manera más restrictiva y específica que la del fin general de minimizar el gasto público» (Ayton, 1976, pág. 62).

Este es un comentario interesante, si bien presentado con el tacto de un funcionario público, sobre el proceso decisorio que tiene efecto en un distrito que, en cuanto a composición política se refiere, de ninguna manera puede ser considerado como atípico para un área rural. Uno se pregunta qué hubiera sido de la electrificación rural, de haber sido dejada en manos de los contribuyentes locales. Sea como fuere, Ayton pasa después a considerar las opciones que se abren a la política dentro de aquellos límites y su impacto sobre individuos y comunidades locales. Para el sector relativamente desposeído de la población rural, es un vislumbre deprimente, aunque instructivo, de lo que ocurre cuando sus necesidades son descartadas a favor de un nivel más bajo de contribuciones. Para situar los datos de Ayton en perspectiva es importante darse cuenta de que el 66 por 100 de las aldeas de Norfolk tienen menos de 500 habitantes y el 44 por 100 tienen menos de 300, mientras que en el otro extremo solamente el 11 por 100 tienen más de mil. Como Ayton hace notar:

«La pequeñez de la aldea media es un factor

crucial en términos de los servicios e instalaciones que se pueden establecer en cada una de ellas. Los estudios llevados a cabo por el Departamento de Planificación del concejo municipal de Norfolk han identificado umbrales críticos en relación con varios servicios. Por ejemplo, para una población de 300 a 500 habitantes se estima que la aldea puede mantener una tienda, un bar y una escuela de 30 a 50 alumnos. Pero una escuela primaria de 100 alumnos, que ya es económicamente aceptable, requiere una población base de 1.000 habitantes, mientras que una escuela de grado "intermedio" (7) de 240 alumnos requiere 4.000. Cada doctor debe tener como mínimo 2.000 pacientes, y así una consulta con tres doctores (8) necesita una población de 6.000 habitantes; un consultorio regular es viable en una aldea solamente a partir de los 1.800. Se proporciona un practicante en el área por cada 3.000 habitantes, y una farmacia sobre la base de una clientela de 4.000 a 4.500 personas» (*ibid.*, pág. 65).

En un distrito rural como Norfolk esto significa que muchos de los servicios están situados a considerable distancia y representan, por consiguiente, un elevado coste para muchos de los que los necesitan. Aunque Ayton se somete simplemente a las realidades económicas, merece la pena señalar que, en el caso de los servicios públicos, estas «realidades» son en principio (aunque uno sospecha que lo son cada vez menos en la práctica) negociables políticamente. En el contexto de la política rural existente, sin embargo, las conclusiones de Ayton son inevitables: la provisión de servicios debe concentrarse en las aldeas mayores «y estar respaldadas por programas dirigidos a mantener un nivel razonable de servicios sociales (bibliotecas

(8) El «health visitor» es una figura intermedia entre el practicante y el «social worker» (empleado social), sin equivalente en el sistema de la seguridad social española, con la misión de respaldar al médico en los problemas menores de salud y de visitar regularmente, ayudar e incluso educar a las familias que lo necesiten en lo relativo, por ejemplo, al embarazo o al cuidado de los bebés, etc.

móviles, transporte público, visitantes de sanidad, comidas ambulantes (9), etc.), en los poblados no seleccionados» (*ibid.*, pág. 67). Cada cual deberá elegir, después de informarse adecuadamente, entre «una aldea pequeña y el acceso directo a los servicios; ambas cosas a la vez no se pueden obtener» (*ibid.*).

Al contribuyente rural acomodado, cuyas opiniones tienen peso en el ayuntamiento, ésta le parece una solución enteramente racional: no solamente se estabiliza así el coste de la provisión de servicios, o incluso se reduce, sino que las economías de escala obtenidas pueden evitar una utilización inadecuada de los recursos y ampliar así la gama de servicios que ofrecer. La realidad es, sin embargo, muy otra para los menesterosos: las dos millas de penosa caminata por la fangosa senda que le espera a la mujer del obrero del campo si quiere coger el autobús que —amenazada la línea con el cierre total— sólo pasa lunes y jueves (excepto festivos); los ancianos atrapados en sus viviendas aisladas: correos a dos millas de distancia; el hospital, a veinte. Los pobres y los ancianos no han «elegido» vivir en sus aldeas de un modo consciente, sino que se encuentran varados allí a causa de tres décadas de cambio social rural y de la creciente indiferencia pública ante su situación. Les faltan los recursos necesarios para transformar sus necesidades en demandas, y, sin embargo, son demandas, no necesidades, a lo que la mayoría de los servicios públicos rurales saben responder. El nivel de las contribuciones permanece sacrosanto y ellos no tienen voz en el proceso decisorio, ni forman grupos de presión, sino que protestan o refunfunan por lo bajo y continúan de un modo u otro en la brega. Mientras tanto, el nivel de los servicios rurales empeora lenta pero irreversiblemente.

Observando las viviendas de recreo y las viejas moradas campesinas ya restauradas que abundan ahora en las aldeas inglesas, es fácil pasar por alto estos problemas. La

(9) «Meals-on-wheels» es una institución de caridad que proporciona una comida caliente diaria, distribuida por voluntarios, los días de trabajo, a los ancianos que se suscriben mediante una módica cuota: el resto de los gastos de cocina es subvencionado por el gobierno local.

otra cara de la Inglaterra rural es más difícil de destacar ahora que no se admite abiertamente con facilidad. En tiempos pasados, al menos, cuando la pobreza rural era corriente, la experiencia de la privación podía ser comparada por la mayoría de los aldeanos. Pero ahora la pobreza no trae consigo un sentimiento de reciprocidad, sino uno de exclusión. La urbanización del campo ha permitido ver cara a cara entre los nuevos residentes un estilo de vida que antaño se observaba distante y pasajeramente. Los pobres rurales encuentran, de una manera desconcertante, que tanto ellos como sus necesidades son considerados como residuales, o incluso ignorados; que los debates públicos pasan a tratar de problemas sin que se les permita el lujo de participar; que se presta más atención a la apariencia visual del campo que al nivel de vida de los que trabajan en su cuidado; que se expresa una mayor preocupación por los efectos de los modernos pesticidas sobre las mariposas que sobre los empleados del campo. Y, sin embargo, su nuevo status de minoría no es lo más adecuado para la protesta efectiva ni les da ninguna esperanza de conseguir el más mínimo cambio tangible si tratasen de ello. En consecuencia, se inclinan a «ir tirando», mientras el público en general carece de motivos para cambiar la imagen que tiene formada del campo acogedor y satisfecho.

CONCLUSION

El efecto más importante de la urbanización del campo ha sido la transformación de la Inglaterra rural en un territorio donde predominan las clases medias. Las políticas que sistemáticamente ponen a los pobres rurales en desventaja tienen, por consiguiente, asegurado el apoyo democrático local. Lo cual sugiere que toda mejora importante en el nivel de vida relativo de los menesterosos rurales tendrá que surgir, como siempre, de cambios iniciados a nivel nacional, no a nivel local, mediante la difusión hasta las áreas rurales de reformas e innovaciones introducidas con una base universalista. Aunque sea para-

dójico que la creciente polarización de la sociedad rural vaya al mismo tiempo acompañada por una creciente identificación de los agricultores con sus empleados, en varios aspectos los nuevos residentes han proporcionado el estímulo necesario para *ambos* procesos. Alejados de los forasteros nuevos residentes, los trabajadores del campo han reconocido una identidad común con los agricultores y los compañeros de la localidad. Sin embargo, los obreros agrícolas, al igual que otros elementos de la población rural desposeída, raramente se percatan de que, a unas millas de distancia, en la cámara de sesiones del ayuntamiento, los representantes de los intereses de los agricultores y los nuevos residentes se ponen de acuerdo para instrumentar políticas que van en detrimento suyo. *Plus ça change...*

BIBLIOGRAFIA

- AMBROSE, Peter (1974): *The Quiet Revolution* (London: Chatto and Windus for Sussex University Press).
- AYTON, John (1976): «Rural Settlement Policy: Problems and Conflicts», en P. J. Drudy (ed.) *Regional and Rural Development: Essays in Theory and Practice* (Chalfont St. Giles: Alpha Academic), págs. 59-68.
- BERESFORD, Tristram (1975): *We Plough the Fields* (Harmondsworth: Penguin Books).
- CONNELL, J. (1974): «The Metropolitan Village: Spatial and Social Processes in Discontinuous Suburbs», en J. H. Johnson (ed.), *The Geography of Suburban Growth* (London: Wiley).
- CRICHTON, R. (1964): *Commuter Village* (Newton Abbot: David and Charles).
- DONALDSON, J. G. S., y DONALDSON, F. (1972): *Farming in Britain Today* (Harmondsworth: Penguin Books).
- EDWARDS, A., y ROGERS, A. (eds.) (1974): *Agricultural Resources* (London: Faber).
- FRANKENBERG, Ronald (1966): *Communities in Britain* (Harmondsworth: Penguin Books).
- GREEN, R. J. (1971): *Country Planning* (Manchester: Manchester University Press).
-

- GROVES, Reg (1949): *Sharpen the Sickle!* (Windsor: Porcupine Press).
- HALL, Peter *et al* (1973): *The Containment of Urban England* (London: Allen and Unwin).
- HARRIS, Clement (1974): *Hennage: A Social Structure in Miniature* (New York: Holt, Rinehart and Winston).
- HOBBSAWM, E. J., y RUDE, G. (1973): *Captain Swing* (London: Lawrence and Wishart).
- JOSLING, T. E. (1974): «Agricultural Policies in Developed Countries: An Overview». *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 25, núm. 1, págs. 229-263.
- MOSS, L., y PARKER, S. (1967): *The Local Government Councillor* (London: HMSO).
- NEWBY, Howard (1972): «The Low Earnings of Agricultural Workers: A Sociological Approach». *Journal of Agricultural Economics*, Vol. 23, núm. 1, págs. 15-24.
- (1977): *The Deferential Worker* (London: Allen Lane).
- NEWBY, Howard; BELL, Colin; ROSE, David, y SAUNDERS, Peter (1978): *Property, Paternalism and Power* (London: Hutchinson).
- PAHL, R. E. (1965): *Urbs in Rure* (London: Weidenfeld and Nicolson).
- (1970): *Whose City?* (London: Longman).
- RAWSON, Marilyn, y ROGERS, Alan (1976): *Rural Housing and Structure Plans*, London University, Wye College, CPU Occasional Paper.
- SELF, P., y STORING, H. (1962): *The State and the Farmer* (London: Allen and Unwin).
- THORNS, D. (1968): «The Changing System of Rural Stratification». *Sociologia Ruralis*, Vol. VIII, núm. 2, págs. 161-178.
- WILLIAMS, Raymond (1973): *The Country and the City* (London: Chatto and Windus).

RÉSUMÉ

En lui approchant des diverses perspectives —la structure sociale, économique ou occupationnelle, la psychologie, la sociologie—, l'auteur étudie le processus d'urbanisation expérimenté par l'Angleterre rurale, processus que, comme conclusion fondamentale, lui amène à postuler la transformation de cette société dans une autre dominée idéologiquement et politiquement par les classes moyennes.

Dans cette ligne, l'auteur suggère le divorce entre les intérêts des diverses classes sociales dont la conséquence serait l'opposition entre les intérêts locaux et «nationales» et, par conséquence, entre l'action politique locale et l'action de l'Etat.

Il décrit aussi bien —djà dans une psychosociologie très attachée à la date actuelle— les relations sociales aux quelles cette situation a donnée lieu parmi les différentes classes de la population rurale.

SUMMARY

Approaching it from different perspectives —social, economic or occupational structure, psychology, sociology—, the author studies the process of urbanisation experienced by rural England, a process that, as a fundamental conclusion, leads him to postulate the transformation of that society into another one dominated ideologically and politically by the middle classes.

In this connection, the author suggests the divorce between the interests of the different social classes whose effect would be the political opposition between local and «national» interests and, as a consequence, between local political action and State action.

He describes also —now from a psychosociology very close to the actual data— the social relations caused by this situation among the different strata of the rural population.

